

juez 2º de paz ha comenzado á formar á Campa.

Devuélvanse sus actuaciones al juzgado de que proceden, con copia certificada de esta sentencia para los efectos consiguientes; pubíquese y archívese á su vez el toca.

Así lo decretaron por unanimidad de votos los CC. Presidente y Ministros que formaron el tribunal pleno de la Corte Suprema de Justicia de los Estados Unidos Mexicanos y firmaron.—*S. Lerdo de Tejada.*—*Pedro Ogazon.*—*Juan J. de la Garza.*—*José Arteaga.*—*J. M. Lafragua.*—*Pedro Ordaz.*—*Ignacio Ramirez.*—*M. Auza.*—*S. Guzman.*—*L. Velazquez.*—*M. Zavala.*—*José García Ramírez.*—*Luis M. Aguilar*, secretario.

Son copias. México, Noviembre trece de mil ochocientos setenta y uno.—*Agustín Peralta* oficial mayor.

AMPARO.

Juicio promovido ante el juzgado de Distrito de Yucatan, por el C. José Antonio Díaz y otros, contra el C. jefe político del partido de Izamal que en cumplimiento de la ley local de 23 de Julio del año próximo pasado, les exige el servicio personal de reparar caminos.

PEDIMENTO DEL C. PROMOTOR FISCAL.

C. Juez de Distrito.

Los CC. José Mº Bolio, José Antonio Díaz, Estéban Andrade, Romualdo Manjarrez, Cosme Oribe, Eusebio Medina, Silverio Sansoles y Antonio Leal vecinos todos de Izamal, pretenden que la justicia de la Union que vd. administra, los ampare contra los actos del jefe político de aquella ciudad quien, apoyado en la ley del Estado expedida por su legislatura en Julio del año próximo anterior, de que acompañan un ejemplar, los exige el servicio de *faginas* ó en su defecto el valor de

ellas como previene la citada disposicion local que consideran atentatoria de la garantía individual que otorga en su art. 5º la Constitucion de la República. Y no solo para sí sino hasta para sus respectivos sirvientes, á quienes se obliga á prestar el mismo servicio, piden los promoventes de este juicio que se conceda el recurso invocado, que fundan en el art. 1º fraccion 1ª de la ley orgánica de 20 de Enero de 1869. El fiscal, si bien no puede poner en duda jamas que el C. Bolio y socios estén en el pleno ejercicio de sus derechos al intentar su defensa propia, contra los actos que atacan sus garantías, no opina que tengan la misma facultad para abrogarse la representacion de personas extrañas con idéntico objeto y sin mas título que el de ser sirvientes de ellos; pues tales sirvientes, que ni siquiera se toman la molestia de designar por sus nombres, como si fuesen manadas de ovejas, son tan libres como esos sus buenos amos que tanto se afanan por exonerarlos de los servicios públicos á fin de no apartarlos ni un solo instante del suyo particular, y pueden en consecuencia, con la misma plenitud de derecho salir á su propia defensa, ó encomendarla á quien mejor les parezca si es que realmente se oponen á la prestacion de otras que impone la prescrita ley del Estado. De semejante premisa que el tribunal ha tenido necesidad de establecer antes de entrar en el fondo de la cuestion, se desprende forzosamente la consecuencia de que los signatarios del escrito de amparo carecen de personalidad para pedirlo en nombre y beneficio de sus sirvientes. Ahora, respecto de ellos, es incuestionable que debe concederse; porque las *faginas* que se exigen no son otra cosa que trabajos personales sin remuneracion alguna, segun consta de la repetida ley local que los impone á los ciudadanos para la construccion ó mejoramiento de los caminos públicos; y si el C. José Mº Bolio de Izamal y socios, no tienen voluntad de prestarlos, es evidente que se

falta al art. 5º de la Constitucion toda la vez que quiera obligárseles á su prestacion personal ó á su remuneracion en el precio en que están cotizados. Es verdad que estos trabajos constituyen el adelanto de los pueblos porque facilitan los medios de comunicacion y las transacciones mercantiles; verdad es tambien que de estas ventajas, la clase que menos se aprovecha es la proletaria que está acostumbrada á caminar aun por estrechas veredas, y de la cual sin embargo no se habia levantado hasta hoy ni un solo individuo pidiendo amparo contra la ley que impone esos servicios, sin duda por el amor que tienen al progreso de su país, ó por el temor de que suprimidas las faginas, se les sustituya con un nuevo impuesto, quizá mas gravoso, cuyos productos se destinen á la construccion y reparacion de caminos; pero ya que de entre la gente mas acomodada de Izamal, se han alzado ocho voces protestando contra los repetidos trabajos y pidiendo amparo contra los actos del gefe político de aquella ciudad que intenta hacer efectiva en sus personas la ley local que los impone, preciso es concederle á los ciudadanos José Mº Bolio, Antonio Diaz, Estéban Andrade, Romualdo Manjarrez, Cosme Oribe, Eusebio Medina, Silverio Sansoles y Antonio Leal que lo ha intentado en su ocurno respectivo; porque, efectivamente, los hechos que motivan su queja violan la garantía que otorga el art. 5º de la Constitucion nacional, y les dá derecho de intentar el recurso intentado, con fundamento del art. 1º de la ley orgánica de 20 de Enero de 1869, que son las disposiciones legales en que á su vez se apoya el infrascrito fiscal para concluir pidiendo á vd. se sirva conceder á los enarrados postulantes el amparo que han promovido en el presente juicio.

Mérida, diez y ocho de Octubre de mil ochocientos setenta y uno.—*P. Híjuelos.*

Sentencia del C. Juez de Distrito.

“Juzgado de Distrito del Estado de Yucatan. Mérida, Octubre veintiuno de mil ochocientos setenta y uno.

Visto este juicio de amparo promovido por los CC. José Antonio Diaz, Estéban Andrade, Romualdo Manjarrez, José Mº Bolio, Cosme Oribe, Eusebio Medina, Silverio Sansoles y Antonio Navarrete, contra el C. gefe político del partido de Izamal que en cumplimiento de la ley local de 22 de Julio del año próximo pasado les exige el servicio personal de reparar caminos, el cual se dice opuesto al art. 5º de la Constitucion federal. Visto el informe justificativo de la autoridad ejecutora del hecho reclamado; el pedimento fiscal y la citacion para sentencia, con cuanto mas verera conducente. Considerando:

Primero; Que la referida ley de 23 de Julio, acumulada á fojas 4, previene en su art. 15 la obligacion que tiene todo habitante del Estado, desde diez y seis hasta sesenta años, de prestar cuatro faginas en el año, entendiendo por fagina lo que un jornalero trabaja ordinariamente en un dia, teniendo presente la dificultad del trabajo y la robustez y edad del faginante.

Segundo; Que por la misma ley dicho trabajo será para la apertura, reparacion, rectificacion y mejora de los caminos, debiendo prestarse dentro de cuatro leguas del domicilio del faginante.

Tercero; Que por el art. 17 de la misma ley se establece: que no harán faginas los que pongan sustitutos y los que paguen á razon de tres reales por fagina.

Cuarto; Que de lo dicho se desprende: que el art. 15 de la ley que motiva este juicio impone la obligacion de un trabajo personal incompatible con el art. 5º de la Constitucion federal, pues fuera de que se halla prohibido por su tenor literal, se confirma esta prohibicion con la interpretacion auténtica que se vé en la historia del Con-

greso constituyente, por Zarco, dieron los constituyentes á dicho art. en su discusion, en la cual se sostuvo la libertad completa del trabajo y que no era lícito exigir trabajos forzosos.

Quinto; Que el art. 17, sin embargo, convierte la obligacion de trabajo personal en pecuniaria; y esta no solo no la prohíbe el art. 5º constitucional, sino que la favorece la interpretacion auténtica de los constituyentes, siendo así que dicen en la historia y lugar citado. "En los casos de servicios al público se vé que los CC. los prestan *voluntariamente*, y cuando se trata de poner estacadas, ú otros trabajos de esta naturaleza, es claro, que el que no quiora trabajar, está en su derecho; que la autoridad lo que puede hacer es, ordenar que los ciudadanos contribuyan *pecuniariamente* á estos objetos, como á todos los que sean de utilidad pública."

Sesto; Que esta obligacion pecuniaria solo monta á la módica suma de doce reales al año y se puede reputar como una contribucion para mejora de caminos, la que puede imponer el Estado en virtud de las facultades que le acuerda el art. 117 de la carta fundamental.

Sétimo; Que el recurso de amparo es individual de la parte que pide, segun el art. 102 de la misma carta. Por estos legales fundamentos, la autoridad en nombre de los supremos poderes de la Union, decreta:

Primero; La justicia de la Nacion ampara y protege á los ocho CC. nombrados arriba, contra el C. gefe político de Izamal que quiere obligarlos á cumplir el art. 15 de la ley local de 23 de Julio del año próximo pasado que les exige un trabajo personal sin su consentimiento y sin retribucion.

Segundo; No los ampara ni protege contra la misma autoridad por la obligacion pecuniaria, en vez del trabajo personal, que impone el art. 17 de la propia ley.

Tercero; Sáquese testimonio de este fa-

llo para su publicacion, y elévense los autos á la Corte Suprema de Justicia de los Estados Unidos Mexicanos para su revision, conforme á los artículos 13 y 27 de la ley suprema de 20 de Enero de 1869. Notifíquese.—*I. Manzanilla.*—Ante mí. —*José Anacleto Castillo.*

Ejecutoria de la Suprema Corte de Justicia.

México, Noviembre siete de mil ochocientos setenta y uno.

Visto el juicio de amparo promovido ante el juzgado de Distrito de Yucatan, por los CC. José Antonio Diaz, Estéban Andrade, Romualdo Manjarrés, José María Bolio, Cosme Oribe, Eusebio Medina, Silverio Sansoles y Antonio Navarrete, contra el C. gefe político del partido de Izamal, que en cumplimiento de la ley local de 23 de Julio del año próximo pasado les exige el servicio personal de reparar caminos, con infraccion segun los quejosos, del art. 5º de la Constitucion federal; y

Considerando: que el art. 15 de la ley referida del Estado de Yucatan dispone que todo habitante del Estado desde la edad de diez y seis hasta la de sesenta años, dé cuatro faginas en el año en los meses de Febrero, Marzo, Abril y Mayo, quedando á su arbitrio dar una mensual, ó las cuatro consecutivas en el mes que se les cite, entendiéndose por fagina lo que un jornalero trabaja en un día y teniéndose presente la dificultad del trabajo y la robustez y edad del faginante: que el art. 17 de la misma ley del Estado de Yucatan ordena que no harán faginas los habitantes que pongan sustitutos ó los que paguen á razon de tres reales por fagina: que la disposicion contenida en el art. 15 impone un trabajo personal que los quejosos manifiestan no tienen voluntad de prestar, y por lo mismo se les ataca la garantía á que se refiere el art. 5º de la Constitucion federal: que

el art. 17 de la ley del Estado de Yucatan de Julio de 1870 al establecer que las faginas puedan desempeñarse, ó poniéndose sustitutos ó satisfaciendo tres reales por fagina no obliga á trabajo personal, sino que mas bien impone una contribucion á obligacion pecuniaria, cuya contribucion puede imponerse por las legislaturas de los Estados, segun el art. 117 de la Constitucion federal, lo que siendo así no hay violacion de alguna garantía, como la habia en el caso de que no queriéndose poner sustituto ó pagarse los tres reales por fagina se exija el trabajo personal; pues en este caso se violaria la á que se refiere el art. 5º de la Constitucion federal; bajo los conceptos expresados, se decreta:

Que se confirma la sentencia pronunciada el 25 del mes próximo pasado por el juez de Distrito de Yucatan, que declara en primer lugar: que la justicia de la Union ampara y protege á los dichos ciudadanos nombrados arriba contra el C. gofe político de Izamal, que quiere obligarlos á cumplir el art. 15 de la ley local de 23 de Julio del año próximo pasado que les exige un trabajo personal sin su consentimiento y sin retribucion; y en segundo lugar: que no los ampara ni protege contra la misma autoridad por la obligacion pecuniaria en vez del trabajo personal que impone el art. 17 de la propia ley.

Devuélvase sus actuaciones al juzgado de Distrito de Yucatan con copia certificada de esta sentencia para los efectos consiguientes; publíquese, y archívese á su vez el toca.

Así lo decretaron por unanimidad de votos respecto del primer punto, y por mayoría respecto del segundo, los CC. Presidente y Ministros que formaron el tribunal pleno de la Corte Suprema de Justicia de los Estados Unidos Mexicanos y firmaron.
—S. Lerdo de Tejada.—Pedro Ogazon.
—Juan J. de la Garza.—José Arteaga.
—J. M. Lafragua.—P. Ordaz.—Ignacio Ramirez.—M. Auza.—S. Guzman.—L.

Velazquez.—M. Zavala.—José García Ramirez.—Luis Mº Aguilar, secretario.

Es copia que certifico. México, Noviembre quince de mil ochocientos setenta y uno.—Lic. Agustín Peralta, oficial mayor.

AMPARO.

Juicio promovido ante el juzgado 1º de Distrito de México por la Sra. Dª María de la Concepcion Gonzalez, contra una orden del ministerio de gobernacion por la que se previene al ayuntamiento de esta capital, que la casa n.ºm. 10 de la calle de San Andres se le adjudique á D. Ignacio Noriega.

PEDIMENTO DEL C. PROMOTOR FISCAL.

C. juez.

El promotor dice: que abierto á prueba el presente juicio, se recibió del C. ministro de gobernacion el informe que corre agregado, y la copia del acuerdo en que se mandó que el ayuntamiento otorgara á favor de D. Ignacio Noriega la escritura de adjudicacion de la casa n.ºm. 10 de San Andres. La Sra. Gonzalez, con su prueba presentó el testimonio de la adjudicacion de la finca que hizo á su favor el C. juez Mariano Navarro el año de 1856, y que devolvió el año de 1859, el certificado de la alcabala pagada cuando se le adjudicó la finca; varios recibos de diversas cantidades pagadas al hospital de San Andres: la fé de bautismo de la Sra. Gonzalez; la de defuncion de sus padres; un oficio del C. ministro de hacienda, de 19 de Marzo de 1868 en que se le comunicó el acuerdo del C. presidente, de que no pudiendo acceder á su pedido de que se le pusiera en posesion de la finca, debería ocurrir á los tribunales, y la copia del ocurso que presentó al ayuntamiento en 23 de Agosto de 1869 pidien-